

Las expectativas de los débiles. Protesta obrera y política en Tucumán, durante el verano de 1932*

María Ullivarri**

Resumen:

Este trabajo intenta analizar los procesos de lucha obrera en la provincia de Tucumán, al norte de la Argentina, durante los primeros meses del año 1932 y sus vínculos con los sucesos políticos provinciales. Para ello nos detendremos en una coyuntura de protesta obrera en un momento de crisis política, social y económica, donde la represión fue un componente importante de las relaciones entre el Estado y la sociedad. De esta forma, una huelga violenta en 1932, el contexto político e institucional particular en el que se inscribió, los usos que de ella hicieron los políticos y los sentidos otorgados a la misma por los trabajadores pretenden ser el nudo central de este artículo.

Palabras-clave: trabajadores, política, huelgas, represión.

Abstract:

This paper attempts to analyze the processes of labor struggle in the province of Tucuman, northern Argentina, during the first months of 1932 and its links with the local political events. To do this we'll examine a period of protest at a time of political, social and economic crisis, where repression was an important component of relations between state and society. In this way, a violent strike in 1932, the particular political and institutional context in which it was entered, the uses made of it by politicians and the senses given to it by workers are the main topics of this article.

Keywords: workers, politic, strikes, repression.

* Se agradecen los comentarios de los evaluadores anónimos de la Revista Historia Social.

** Licenciada en Historia, becaria doctoral del CONICET con sede en el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) del CONICET. E-mail: ulliva@gmail.com

Introducción

En Argentina, los comienzos de la década del 30 fueron años aciagos por las duras consecuencias económicas y sociales de la crisis de 1929. En la esfera política, un golpe de Estado – ocurrido en septiembre de 1930 – entronizó en el poder al general José Félix Uriburu, que aspiraba promover reformas de tipo corporativo. La administración de facto, amparada en el estado de sitio y en la ley marcial, ahondó los mecanismos represivos, profundizó la vigilancia policial y utilizó la deportación y la cárcel como mecanismo para mantenimiento del orden. Las actividades sindicales se dificultaron y la protesta obrera intentó ser contenida en un marco de profundo deterioro de las condiciones laborales y materiales de los trabajadores.

En momentos donde la coacción y los controles se agudizan, los más débiles de la cadena se “repliegan en la defensiva”, desarrollan otras formas de resistencia cotidiana, pero no dejan de esperar la oportunidad para volver a disputar espacios dentro del campo de fuerzas donde se discuten el poder, los intereses y los beneficios. La búsqueda de intersticios por donde filtrar el descontento es un proceso constante y, muchas veces, las oportunidades surgen allí donde las situaciones políticas e institucionales abren una brecha que permite a los trabajadores inscribir su demanda en el espacio público. Esas oportunidades no sólo permiten la acción sino que, al mismo tiempo, también tiñen el sentido de éstas.

En tal sentido, en este trabajo nos detendremos en el análisis de los procesos de lucha obrera en Tucumán durante los primeros meses del año 1932 y sus vínculos con los sucesos políticos de la provincia. Para esto nos concentraremos en el estudio de una huelga general violenta que, aunque tuvo su origen en una campaña obrera nacional de lucha contra las deportaciones, adquirió un alto contenido político en el escenario tucumano al inscribirse en el contexto conflictivo de restauración formal del régimen democrático después de un golpe de Estado. Este proceso político en el que la medida de fuerza se inscribió se llevó adelante sin la principal fuerza política del país, la Unión Cívica Radical (UCR) y en él, además, se involucraron las expectativas, los intereses y los deseos de cambio de amplios sectores de la

sociedad que se entrelazaron con las consignas de lucha obrera a nivel nacional.

El artículo está dividido en cuatro partes. En la primera de ellas analizaremos los acontecimientos anteriores al conflicto poniendo especial atención a la dinámica del gobierno de facto en relación al problema obrero y las características de las relaciones políticas posteriores a los comicios de noviembre de 1931. En una segunda parte delinearemos algunas pautas del escenario gremial de la provincia, mientras que en la tercera describiremos la violenta huelga general de febrero de 1932 que se inscribió en la coyuntura específica del fin del gobierno de facto y las negociaciones en torno a la asunción de las nuevas autoridades. En un cuarto apartado nos detendremos en las explicaciones de todos los sectores con respecto a los acontecimientos de esa huelga e intentaremos explicar las motivaciones de la misma.

1. El escenario político

El arribo de la intervención uriburista a la provincia fue presentada como un acto depurador de *la política de comité* que había regido bajo el gobierno depuesto de la Unión Cívica Radical, fuerza política que se había mostrado casi imbatible en los comicios desde las reformas electorales de 1912. Sin embargo, no tardó en quedar claro que la preservación del orden social se constituiría en el eje de las preocupaciones del nuevo gobierno.¹ En ese sentido, diez días después del golpe de Estado, el gobierno provisional de la provincia, en manos del político conservador Ramón Castillo, invitó a los representantes de los principales sindicatos obreros tucumanos a presentar

¹ Roberto Korzeniewicz (1993) recalca que los primeros meses que siguieron al golpe de Estado constituyen un lapso de excepción donde se especuló con la idea de promover la incorporación corporativa del trabajo organizado. Hiroshi Matsushita (1986) lo plantea de diferente manera al destacar que no constituía una preocupación del “régimen” como lo describe Korzeniewicz, sino que era una actuación de oficio del director del Departamento Nacional de Trabajo que contagió a sus similares de provincia. Sandra McGee (2005) señala, por su parte, que en un principio convivieron dos tendencias al interior de la coalición gobernante. Una de ellas partidaria de resolver las disputas entre capital y trabajo mediante la conciliación y reprimir sólo a los más combativos. La otra, partidaria de la represión lisa y llana, fue la que se impuso.

sus peticiones al Ministro de Gobierno.² Estos reclamaron la libertad de los trabajadores detenidos y el cumplimiento de leyes y pliegos producto de “largas luchas y sacrificios, que ahora se violan abiertamente”. (*La Gaceta*, – LG en adelante – 17.09.1930).

No obstante, más que habilitar un canal de comunicación, la reunión culminó con la clara advertencia sobre la necesidad de ajustar las formas de acción sindical “a lo justo y prudente.” En este contexto, ceñirse a la “prudencia” implicaba para el mundo del trabajo, y más específicamente para los trabajadores organizados en sindicatos, la modificación de sus estrategias de acción colectiva, ya que la advertencia dejaba sentado que no se toleraría ningún intento de perturbar la tranquilidad social. En definitiva, la invitación oficial intentó forzar un acuerdo tácito en el que los sindicatos debían renunciar a sus tradicionales formas de expresión reivindicativa y sólo podían canalizar sus reclamos a través del Departamento Provincial de Trabajo. Fuera de esas vías, el accionar público de los trabajadores fue desalentado y forzado a replegarse.

Tal intento de canalizar los reclamos y conflictos a través de esa repartición estatal no significó, empero, una novedad en las prácticas de los sindicatos, que conocían y hacían uso de los mecanismos de conciliación, concertación y regulación laboral existentes. Sí lo fue, en cambio, que se dificultaran, o directamente se prohibieran otros canales de expresión, especialmente los vinculados al uso del espacio público. Bien lo advirtió el jefe policial, quien tiempo antes de prohibir todas las manifestaciones públicas declaró:

Que era menester ofrecer al país la mayor tranquilidad [...] Que vería con agrado que se pusiera la mejor buena voluntad para dar solución antes que se provocara un conflicto que la policía y el gobierno estarían en el deber de combatirlo en defensa de los bien entendidos intereses del país. (LG, 30.12.30)

De esta forma, los intentos por “encauzar los conflictos sociales dentro de la legalidad”, se insertaban en un contexto donde la policía “clausuraba

² Los sindicatos invitados fueron Luz y Fuerza, Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, Sociedad de Resistencia de Obreros Sastres, Unión Chauffeurs, Sociedad de Resistencia de Obreros Albañiles y Anexos, Sindicato de Pintores, Sociedad de Resistencia de Obreros Mosaístas, Sindicato de Carpinteros, Aserradores y Anexos y Sindicato de Mozos.

locales obreros, detenía a sus militantes más activos y restringía la más elemental libertad de movimiento.” (*La Vanguardia*, – LV, en adelante – 18.07.1931).

Sin embargo, luego de un año y medio de gobierno bajo duras condiciones económicas y represivas y del definitivo fracaso de su plan de reformas institucionales de tipo corporativista que no había despertado mayor entusiasmo ni en los partidos políticos ni en el ejército, Uriburu se vio obligado a convocar a elecciones generales para fines de 1931.

En la provincia de Tucumán se postularon para gobernador representantes del Partido Demócrata Nacional (PDN), de Defensa Provincial Bandera Blanca (DPBB), del Partido Socialista (PS) y de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, con un resultado tan parejo entre las dos primeras fuerzas, que la contienda debió definirse en el Colegio Electoral de la provincia.³ Adolfo Piossek, candidato del Partido Demócrata, y el conservador devenido en reformista Juan Luis Nogués del partido Bandera Blanca, necesitaban los votos de los electores del PS para obtener el triunfo.

Luego de las elecciones de noviembre de 1931 y hasta la reunión del Colegio Electoral en febrero de 1932,⁴ la provincia se vio envuelta en una interminable sucesión de negociaciones políticas alimentadas por rumores y sospechas.⁵ Los socialistas exigían, a cambio de sus votos, claras pruebas de

³ Tanto Defensa Provincial Bandera Blanca como el Partido Demócrata reconocían el mismo origen conservador, el Partido Liberal. Sin embargo, DPBB estaba conformada por los sectores jóvenes del conservadurismo y se presentaba como una nueva fuerza política, con un programa basado en la realización de una obra de gobierno tendiente a solucionar las falencias sanitarias y educativas de los sectores sociales más desprotegidos. Mientras que el Partido Demócrata, en cambio, era una coalición de fuerzas conservadoras que aspiraba a conformar un organismo partidario que interpretara los anhelos institucionales del golpe del 6 de setiembre de 1930, restaurando el orden y las instituciones que se habían visto alteradas durante la etapa del gobierno radical (1916-1930). (Parra, 2007).

⁴ Hasta la reforma constitucional de 1990, las elecciones a gobernador en Tucumán eran indirectas, de esta forma luego de los comicios los candidatos mayoritarios se veían obligados con frecuencia a establecer alianzas o “compromisos” con las minorías para lograr la cantidad de votos necesarios en el Colegio Electoral.

⁵ Las negociaciones, no obstante, se extendieron también a la Capital Federal, donde ambos partidos buscaban “seducir” a la conducción socialista para obtener su influencia en las decisiones del PS local. Asimismo, de estas negociaciones también participaba hasta el presidente electo Agustín P. Justo, quien otorgó su apoyo a DPBB, provocando malestar en las filas demócratas.

una acción de gobierno tendiente a favorecer a los trabajadores. De esta forma, el problema obrero, núcleo de preocupación del PS local, se convirtió en el eje de las transacciones políticas y nutrió las semanas previas a la reunión electoral de amplias promesas y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

En ese contexto político de tensión, que también se caracterizó por las expectativas centradas en la restauración de las instituciones democráticas, el mundo del trabajo organizado comenzó a salir de su letargo. Así, el descontento obrero comenzó a visibilizarse a través de huelgas, protestas por descuentos salariales, manifestaciones, quejas vinculadas a la manipulación electoral del empleo público y denuncias de cesantías a obreros sospechados de no votar a candidatos del Partido Demócrata Nacional. Estas muestras de disconformidad traducían cierto grado de relajación en los controles represivos en el marco de la disolución del régimen de facto, pero también el incremento de la actividad obrera en todo el territorio nacional en las vísperas del levantamiento del estado de sitio y la restauración de las libertades públicas.

2. El escenario gremial

En la provincia de Tucumán, hacia principios de 1932, el mundo sindical era un escenario heterogéneo y diverso. Convivían gremios con tradición, como el de panaderos, Luz y Fuerza o el de sastres; instituciones de base nacional – Unión Ferroviaria, Unión Linotipistas; Mecánicos y afines (ULMA) y La Fraternidad –; sociedades de resistencia sobre la base de oficios, con tendencia anarquista; sindicatos autónomos como el de mozos, empleados de comercio o *chauffeurs*. Sindicatos de corte más industrial como los de fideeros, ladrilleros o el Sindicato de Obreros de la Industria del Dulce. Existía también una amplia gama de sindicatos por oficio como yeseros, carpinteros y pintores. Había gremios femeninos que luego se dispersaron, como la Sociedad de Lavanderas y Planchadoras Unidas y la Unión Parteras. Estaban también organizados los vendedores de diarios y revistas – conocidos como *canillitas* –, los obreros municipales, los trabajadores de los mataderos, los telefónicos y las telefonistas, los trabajadores gráficos, los empleados del

Estado, etc.⁶

Dos entidades agrupaban a la mayoría de las organizaciones provinciales, la Federación Obrera Local Tucumana (FOLT) y el Comité Mixto de Gremios Autónomos (CMGA).⁷ En ambos escenarios convivían tendencias ideológicas diversas. Si bien la FOLT estaba adherida a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), de orientación anarquista, no todos los sindicatos que confluían en ella respondían a esa corriente. Lo mismo ocurría en el Comité Mixto, donde se agrupaban socialistas, autónomos, sindicalistas y comenzaba a hacerse sentir la impronta comunista, cuya presión por imponer objetivos derivados de las directivas partidarias venía no sólo dificultando las relaciones del CMGA con la FORA, sino también los vínculos entre los mismos sindicatos que lo componían.

En ese sentido, la provincia reproducía, en una escala mucho más pequeña y más matizada, los cruces y las tensiones existentes en el movimiento obrero de Buenos Aires. Allí había comenzado a plantearse una lucha contra las medidas represivas de Uriburu, pero fueron las órdenes de deportación de más de 400 obreros detenidos en las cárceles de todo el país, firmada poco antes de retirarse de la presidencia, el motivo que desencadenó una

⁶ Los trabajadores de la principal industria de la provincia, la azucarera, no estaban formalmente organizados. Hacia 1931 las fuentes dan cuenta de la existencia de una Federación de Obreros Tucumanos de la Industria Azucarera (FOTIA), pero luego desaparece. No obstante, con ese mismo nombre pero fundada sobre otras bases, se constituye en 1944 una organización que se convertiría en una de las más poderosas fuerzas sindicales bajo el gobierno del General Perón. No obstante, durante los primeros años de la década la organización de los obreros azucareros fue débil y esporádica.

⁷ En la FOLT, adherida a la FORA, se agrupaban varios sindicatos y sociedades de resistencia. Entre ellos podemos nombrar a la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, Sociedad de Resistencia de Obreros Mosaístas y Anexos, Sindicato de Carpinteros, Aserradores y Anexos, Federación del Calzado, Oficios Varios, Sociedad de Resistencia de Difundidores de Prensa, Sociedad de Resistencia de Obreros Albañiles y Anexos, Sindicato de Pintores, Agrupación Brazo y Cerebro. El Comité Mixto estaba compuesto por la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio, Obreros Fideeros, Artes Gráficas, Sindicato Unión Chauffeurs, Sindicato de Mozos, Obreros Pintores, Obreros Panaderos Autónomos, Albañiles Autónomos, Obreros Municipales, Cocheros, Conductores de Carruajes, Ladrilleros de Alto de la Pólvara y de Villa Luján, Unión Linotipistas, Luz y Fuerza y otros.

agitada campaña de protesta.⁸

El Partido Comunista (PC) aseveraba que con la firma del decreto de deportaciones “la dictadura militar fascista ha querido, antes de dejar el poder, completar su obra de opresión inaudita de las masas obreras y laboriosas” (Boletín Interno de Agit-Prop – BI en adelante –, 02.1932). Encarcelados y repatriados con un destino sombrío estarían aquellos que lucharon bajo condiciones hostiles por un mejor salario, contra la “racionalización y el standard”, contra las suspensiones, etc. Permitir que los deportaran era para los sindicatos y los partidos de izquierda un gesto de rendición.⁹

Esta medida generó el repudio de la Confederación General del Trabajo (CGT, dirigida por los sindicalistas y con presencia de socialistas) y una fuerte movilización contra las deportaciones, al frente de la cual se ubicaron la FORA y los sindicatos comunistas nucleados en el “Comité Obrero y Estudiantil contra las Deportaciones”. Este último, respondiendo a las directivas del Comintern, tenía la ambición de conformar un frente único de lucha para “arrancar de las manos criminales del dictador nuestros presos obreros!” Y para esto – decían los obreros de la madera – “tenemos una sola arma: la huelga!” (El obrero de la madera – OM en adelante –, 01.1932).

Y aunque esta idea era compartida también por la FORA, los comunistas, embanderados en la estrategia de “clase contra clase”, consideraban a esta organización uno de sus principales obstáculos. A su

⁸ Las deportaciones de trabajadores en el país tienen su origen normativo en la Ley de Residencia de 1902, promulgada en un escenario de agitación obrera, principalmente anarquista, y en el marco de un debate sobre cómo actuar frente al problema obrero y la cuestión social. En una sociedad que estaba creciendo por la inmigración europea y con el claro convencimiento de una élite dirigente de que este flujo introducía en el país “ideas extranjeras”, el procedimiento consistía en deportar a sus países de origen, sin juicio previo, a inmigrantes perseguidos o condenados por tribunales extranjeros o a aquellos “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”.

⁹ La acción del gobierno contra aquellos extranjeros que consideraba una amenaza era infatigable. *La Vanguardia*, periódico socialista, da cuenta de 158 deportaciones hasta enero de 1932. Unos días después, el 10 de febrero, deportarían otros 150 trabajadores, mientras que en marzo zarparía otro buque con prisioneros. (LV, 10.2.1932). En ese sentido, es importante destacar la fuerte corriente de inmigración europea hacia el país, cuyo flujo se detuvo hasta principios de la década del 30 pero que hizo que durante los primeros años de ésta una gran cantidad de trabajadores del país no hayan nacido en él.

dirigencia la acusaban de “sectaria” por la intransigente negativa a participar en un frente y criticaban su modalidad de lucha, caracterizada por la “asociación libre y espontánea” carente de organización y de estrategia. (Camarero, 2007 e Iscaro, 1973). Por otro lado, también despreciaban a socialistas y sindicalistas, a quienes acusaban de traidores y “revisionistas”, que con prácticas “legalistas” y sus “idas y venidas a los ministerios” no conseguían detener los barcos de deportados. (BI, 02.1932).

Sin embargo, y a pesar de las diferencias, la FORA y los comunistas coincidían en un punto. Ambas tendencias estaban convencidas de que sólo la “lucha en las calles arrancaría de la cárcel a los camaradas presos” (Juventud Comunista – JC en adelante –, 2.1932). Y como esa disputa debía abarcar todo el territorio nacional, solicitaron la solidaridad de todo el proletariado del país. En ese escenario de lucha nacional, en la provincia de Tucumán la FOLT y el Comité Mixto de Gremios Autónomos protagonizaron una de las huelgas más violentas de la historia provincial. Sobre los acontecimientos, sus causas y sus derivaciones nos detendremos en los siguientes apartados.

3. La huelga de febrero de 1932

En el marco de las negociaciones, las especulaciones y la incertidumbre por el proceder del socialismo en el Colegio Electoral que debía definir el nombre del futuro gobernador, el 2 de febrero de 1932, la ciudad de San Miguel de Tucumán fue sacudida por una violenta huelga declarada, en primera instancia, por la FOLT. La huelga comenzó el 1° de febrero en solidaridad con la medida de fuerza declarada por la FORA de la Capital Federal, quien solicitó a todas las entidades afiliadas la adhesión a la protesta por la deportación de algunos obreros y estudiantes detenidos en las cárceles del país que serían enviados a sus países de origen y a quienes les esperaba, seguramente, un destino más incierto y aciago que las cárceles argentinas.

Durante la mañana del día 1°, la huelga se desarrolló en calma, pero esa misma tarde la policía allanó violentamente al local de la FOLT y detuvo a 41 trabajadores que estaban allí reunidos. La noticia circuló rápido en un escenario gremial reducido e inmediatamente los gremios agrupados en el Comité Mixto de Gremios Autónomos declararon la huelga en repudio a la

represión.¹⁰ Lo hicieron la Unión Chauffeurs, el Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato Autónomo de Albañiles y Anexos, la Sociedad de Resistencia de Obreros Fideeros y Anexos, la Sociedad de Ladrilleros sección Alto de la Pólvara, Sindicato Unión General de Ladrilleros de Villa Luján, los Obreros Municipales, el Sindicato de Mozos y la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio.

La huelga sumó a sus objetivos originales la condena a la violencia policial y a las detenciones realizadas durante el día 1º y todos los sindicatos decidieron extenderla hasta las 18 horas del día siguiente o “hasta que los compañeros detenidos recobren su libertad” (El Orden – EO en adelante –, 03.02.1932).

En la mañana del día 2 de febrero, durante el transcurso de un acto de protesta en la plaza principal de la ciudad, un grupo de personas se separó del conjunto y comenzó a destruir todo a su paso. Se cometieron asaltos en la calle, en los mercados, en las ferias, en los cafés, en domicilios particulares, en las farmacias, en los bancos, en los corralones municipales “y hasta en los aires que eran dominados por la horda que vino, conteniendo sus aullidos, pertrechada de piedras y de toda clase de elementos de destrucción.” (LG, 04.02.1932).¹¹

¹⁰ Según la versión del Partido Comunista, la huelga había sido planeada en Buenos Aires para el día 2 de febrero por el “Comité Obrero y Estudiantil contra las Deportaciones”, el que había pedido la adhesión de la FORA. Esta organización no sólo se habría negado a unirse al frente único de lucha, sino que “para aparecer como los auspiciadores” habría adelantado la huelga para el día 1º. Para la provincia de Tucumán, no obstante, no tenemos información que pueda confirmar esas versiones. (Comité Ejecutivo Del Partido Comunista, Legajo del PC N° 3362, Archivo General de la Nación – CEPC, LPC 33-62).

¹¹ No existen datos certeros sobre el número de personas que participaron en las movilizaciones y en los desmanes. Algunas crónicas informan la existencia de varias patrullas de 25 a 30 personas, mientras que los datos sobre los ataques a las casas de tolerancia hablan de 300 personas. Tampoco fue factible obtener los datos sobre la cantidad de trabajadores involucrados en el movimiento huelguístico, pero en una ciudad de 100.000 habitantes la huelga alcanzó una importante magnitud teniendo en cuenta que los presos superaron los 400 y que sólo en un local sindical se detuvo a 41 trabajadores. No obstante, es preciso señalar que no todos los sindicatos adhirieron a la huelga general, manteniéndose al margen de ella organizaciones importantes como la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que aunque se solidarizaron, no participaron de las acciones porque sus dirigencias centrales, afiliadas a la CGT, no adhirieron a la protesta.

La “audacia delictiva de la horda” – relatada por la prensa – fue incrementándose con el transcurso de las horas. “La voz – decían las crónicas – era destruir, sembrar el pánico, desatar extrañas iras con todo y contra todos.” (LG, 04.02.1932).

Los actos de violencia sobre el espacio urbano tuvieron varios ejes. En las primeras horas de la mañana un grupo numeroso atacó los centros de abastecimiento de la población. Las crónicas destacaron a los lugares de provisión de alimentos, medicamentos y materiales de construcción como los blancos predilectos de “los revoltosos”: el Mercado del Norte, el Mercado del Sur, farmacias, almacenes, ferias francas, corralones municipales y los vagones de carga del Ferrocarril Central Argentino que traían aves para los mercados. En esos casos los relatos informan que la “horda” penetró en esos establecimientos “para destruir hasta a los puestos”, y que algunos robaban mercadería mientras otros “sembraban el suelo y la calle de frutas, pesas, balanzas, etc.” (LG, 04.02.1932).

Momentos después, los grupos volvieron hacia las calles y se abocaron a saquear casas particulares, confiterías y comercios del casco central de la ciudad, así como también a destruir vehículos, las lámparas del alumbrado público, letreros luminosos y vidrieras. Las crónicas comentan que “unos grupos rompían cuanto les ofrecía blanco y podía significar un daño al propietario” y que de algunos domicilios “salieron con cabrillas, gallinas, muñecas y dinero.”

A juzgar por los blancos elegidos, factores como el hambre y la miseria estuvieron presentes en las acciones de los “exaltados”. Pero, asimismo, en un movimiento violento y espasmódico fueron la destrucción y el robo los factores que los redimían frente a aquello que simbolizaba un nivel de vida que las clases obreras, habitantes de un suburbio donde “la mayoría de las familias vive en casuchas miserables” no podían alcanzar (Figuerola Román, 1943). En ese sentido, habría existido un componente clasista en el estallido de la multitud. Ésta, señala Canetti (1984, citado por James, 1995) tiene particular afición por destruir objetos rompibles y viviendas cuyas imágenes representativas equivalen a eliminar las distancias y diferencias sociales establecidas.

Pero esas “turbas” no sólo atentaron contra lo que simbolizaba las

diferencias sociales, la explotación, el hambre y la represión. También destruyeron, con una violencia inusitada, las casas de tolerancia ubicadas en la calle Marco Avellaneda, algunos comercios de lotería y quioscos de diarios y revistas.¹²

La geografía y las características de los sucesos permiten asociar algunos blancos puntuales con la situación de las clases obreras de la provincia. No obstante, existieron muchos escenarios de destrozos que poco tenían que ver con los repertorios de acción típicos de los trabajadores. A partir de lo sucedido en esos escenarios es posible pensar que lo acontecido fue un desborde popular que trascendió holgadamente la protesta obrera o por lo menos los objetivos que se habían planteado sus dirigentes.

Ya entrada la tarde del 2 de febrero, el ejército fue llamado a actuar ante la impotencia del Escuadrón de Seguridad de la policía y del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación. La acción represiva de las fuerzas militares se fue desplegando por la ciudad, clausurando locales y haciendo “detenciones en masa”. Después de unas horas la ciudad recuperó la calma. Esa noche – señalan las crónicas – el centro de la ciudad permaneció a oscuras ya que el sistema de iluminación pública había sido prácticamente destrozado a pedrazos. Muchos vecinos salieron, como era habitual, a las veredas para aprovechar la brisa nocturna luego de un día de calor sofocante, mientras que otros, todavía perplejos y asustados, decidieron armarse y formar grupos para defenderse, lo que fue alentado a través de un edicto firmado por el Jefe de Policía.¹³

Al día siguiente, con las calles sucias y vidrios desparramados por doquier, la ciudad lucía devastada y conmocionada. El escenario urbano estabacalmo pero nadie olvidaba las “horas de terror” vividas por la población, especialmente por quienes habitaban en los barrios céntricos.

¹² Además de los asaltos, se registraron denuncias de golpizas y abusos a las mujeres que allí trabajaban. Incluso se señaló que una prostituta enferma fue arrastrada por 15 individuos “para satisfacer sus bajos instintos.” (LG, 04.02.1932).

¹³ El Intendente General de Policía firmó un edicto dirigido al pueblo y al comercio a quienes llamaba a prestar «decidida cooperación, procediendo enérgicamente contra los elementos que atenten o cometan cualquier desmán contra la propiedad pública o privada [...] evitando o reprimiendo todo acto que signifique alterar el orden público; sin ninguna clase de contemplaciones.» Edicto del Intendente General de Policía. (LG, 4.02.1932).

El ejército había “ocupado” la ciudad estableciendo campamento en la plaza principal para garantizar la paz social. La policía, a su vez, seguía realizando detenciones y encarcelando a los grupos de obreros que concurrían a pedir la apertura de sus locales sindicales y la libertad de sus compañeros. Por la tarde del 3 de febrero, los detenidos ya eran más de 400.

La huelga había sido levantada por decisión de los sindicatos a última hora del 2 de febrero. La FORA, no obstante, dejó claro que:

[...] la huelga hubiese sido reanimada con toda la efectividad de otras veces a no ser la impresión existente en el ánimo público arraigada de los hechos del día martes (2 de febrero). Frente a este estado de cosas que se ha señalado ya, frente a ese confusionismo que ha dominado a la población, la FORA declara desde el día miércoles a las 18 horas, la vuelta al trabajo de los gremios adheridos, pero haciendo constar que las causas que motivaron la declaración de huelga, lejos de desaparecer se han reagravado. [...] y la lucha tendrá que reanudarse a la brevedad posible. (LG, 05.02.1932).

Sin embargo, este gesto decidido por la percepción de un estado de ánimo social que no acompañaba la continuación de la medida, debía ser correspondido y la FORA demandó “que no sólo los trabajadores sino la población entera reclamen la libertad de todos los obreros presos [ya que] se les pretende responsabilizar a hechos que no se han cometido.” (LG 05.02.1932).

Por su parte, la dirección nacional del Partido Comunista hizo una dura crítica a la organización de la huelga, argumentando que no había estado bien trabajada desde la base y que tuvo, asimismo, serias dificultades, como “la posición traidora de las organizaciones reformistas” y la “actitud sectaria” de la FORA que habría roto “el frente de lucha”. (BI, 02.1932). Pero en Tucumán las cosas habían sido más violentas que en Buenos Aires y hasta los gremios con auspicios evidentes de los comunistas debieron acatar el levantamiento de la medida. No fue sólo la FORA la que dio término a las acciones, sino también el CMGA, cuyos dirigentes declararon que terminaban la huelga impelidos por las circunstancias “ante el sacrificio excesivo de nuestros compañeros”, aunque aclararon que “la vuelta al trabajo no significa sino una tregua en nuestra lucha de proletarios, la que hemos de continuar hasta obtener la libertad de los 400 presos detenidos con motivo de esta huelga.” (LG, 04.02.1932).

De esta forma, la explosión de la multitud apuró el desenlace de una medida de fuerza que, según declararon la FORA y el CMGA, estaba destinada a continuar.

4. Las interpretaciones

La columna política del diario *La Gaceta* afirmaba con cierto aire de sorpresa que “La huelga monopolizó ayer y anteayer todos los comentarios, relegando a segundo término el tema político”. (LG, 04.02.1932). La violencia había distraído a los políticos “que suelen ser reacios a todo lo que no sea eso, política o politiquería”. En un escenario expectante por la elección del gobernador por el Colegio Electoral, un acto colectivo de descontento como el que San Miguel de Tucumán había vivido tenía un potencial político significativo. Por ello, en los días que siguieron fueron muchos los intentos por imponer explicaciones y otorgar sentidos a los sucesos con el fin de traducirlos en términos políticos capitalizables. De esta forma, en el marco de las tensas negociaciones por la gobernación, muchas voces pusieron en cuestión el origen exclusivamente obrero del desborde y sugirieron la presencia de motivaciones políticas ocultas en los desmanes. Y aunque todos los grupos políticos deseaban obtener réditos de los disturbios, nadie pudo presentar una inculpación terminante porque los blancos de la violencia cubrían a todo el espectro partidario.

En efecto, habían sido saqueadas residencias de dirigentes de la Unión Cívica Radical, blancos y demócratas, así como también las casas de funcionarios judiciales. El único partido que presentó una explicación argumentada fue el Socialista, que acusó directamente a la policía, a todo el sistema político provincial y responsabilizó a las autoridades por lo sucedido. Desconcertado ante lo vivido, el PS dejó entrever que con esos actos se trataba de desprestigiar a “los obreros conscientes” y que, en definitiva, era una maniobra del gobierno y la policía utilizada como “pretexto para la justificación del cierre de los sindicatos” (LG, 04.02.1932).

También circulaban otras interpretaciones de los hechos. Nogués y los radicales acusaban al gobierno de la intervención, aliado de los demócratas. Mientras que otros insinuaban “fines de baja política, tipo Sorthaix [ex

Mientras que otros insinuaban “fines de baja política, tipo Sorthaix [ex gobernador de la Unión Cívica Radical, depuesto por el golpe de 1930 y proscripto en las elecciones] y a su ex jefe de policía, Frías.” (LG, 04.02.1932).

La prensa también tomó parte activa de las especulaciones. El diario de extracción conservadora *El Orden* responsabilizaba directamente a la FORA por lo sucedido, mientras que las crónicas del más moderado e independiente *La Gaceta* se mostraban sumamente desconfiadas de la participación de los “verdaderos trabajadores” y cargaban las culpas sobre “la turba”. Pero ¿quiénes constituían esa “turba”? Las descripciones dibujaron gente fuera de sí y presa de instintos desbordados, pero no determinaron en ningún momento la adscripción social, sindical, política o ideológica de ninguno de los participantes.

Los grupos de comerciantes damnificados, por su parte, utilizaron los acontecimientos para demandar mayor protección a la propiedad privada. Y si bien descartaron la participación de “entidades obreras responsablemente establecidas”, no dejaron de aclarar que estos episodios tenían vinculación directa con las acciones de protesta obrera y sólo eran factibles en el contexto de huelgas. De esta forma, se quejaban de la existencia de organizaciones de trabajadores con antecedentes en este tipo de desmanes.¹⁴

Los socialistas negaban enfáticamente que esa “tribu de salvajes” estuviera compuesta por los trabajadores de los sindicatos que declararon la huelga. Para el PS los protagonistas de los desmanes eran niños y jóvenes “utilizados con bajos propósitos.” En este sentido, aquí hay un punto de coincidencia en varias descripciones. Si bien no se cuenta con información suficiente para hacer una descripción minuciosa de las características de los actores involucrados en los episodios, fue recurrente la referencia a la numerosa participación de jóvenes y niños en los grupos que recorrían la ciudad sembrando el desorden y el miedo. Sin embargo, se perciben diferencias a la hora de explicar los motivos de la participación de menores.

¹⁴ En este sentido, un grupo de comerciantes y empresarios dejaron sentada la necesidad de conformar una Asociación privada pro defensa propia, compuesta por “comerciantes y ciudadanos, debidamente organizada, con el objeto de poder repeler los ataques a la propiedad y a las personas en movimientos de huelga”, ya que, decían, existían antecedentes de este tipo de acciones en otros conflictos. (LG, 04.02.1932).

La Gaceta destacaba que habían sido “chiquillos” dirigidos por “elementos maleantes”, utilizados sólo para “sembrar el caos”, mientras que un diputado socialista afirmaba que eran “muchachos exaltados y gritones” en cuadrillas “custodiadas por la policía”.

Era evidente para todos que la audacia de los más jóvenes contradecía las formas y repertorios de la acción obrera tradicional. Pero este rasgo era rescatado por los comunistas. Desde el órgano nacional de la Federación Juvenil Comunista – que dedicó un artículo a la huelga tucumana – se insistió en que precisamente la participación de menores había sido lo más sobresaliente del movimiento, en tanto la “juventud y la niñez proletaria” habrían contribuido “con su audacia a darle un carácter combativo a la huelga”. Y respondía a las acusaciones de los socialistas destacando que esos “chicuelos inconscientes” que los “reformistas y la burguesía” acusaban de vándalos, demostraron tener “un gran sentimiento de clase y un fuerte espíritu de lucha”. “Estos pibes flacuchos y semidesnudos, concentran en su interior –a pesar de su juventud – un gran odio a los hambreadores del pueblo trabajador.” (JC, 02.1932). Para el PC, en definitiva, se trataba de jóvenes brutalmente explotados en fábricas y talleres, que pasaban hambre y miseria y que, por ello, habían ocupado un lugar destacado en la huelga. Para los comunistas no había “maleantes” ni intereses espurios dirigiendo a los “jóvenes proletarios”.

Junto a las lecturas de los acontecimientos provenientes desde la política, a las quejas de los propietarios de comercios, a las especulaciones de la prensa y las versiones de los partidos de izquierda, los dirigentes sindicales también intentaron imponer sus propias interpretaciones. En principio, algunas organizaciones como Luz y Fuerza y la Sociedad de Difundidores de Prensa deslindaron su responsabilidad con los saqueos y repudiaron los actos que consideraban “de salvajismo”. En las declaraciones y actitudes de dirigentes de otros sindicatos quedaba claro que no había estado en los planes de la dirigencia sindical que la protesta tomara ese rumbo. Sin embargo, aunque condenaban la violencia, no hicieron ningún llamado a detenerla. En el caso de los dirigentes comunistas, se interpretó a los sucesos como una “demostración de energías revolucionarias”, evaluándoselos como “una huella de lucha victoriosa contra la dictadura militar fascista, contra el hambre, contra la rebaja de los salarios y por la libertad de los presos obreros y estudiantiles.”

(JC, 02.1932). De manera que podemos estimar que las diferencias ideológicas y políticas que dividían a la dirigencia sindical, así como también las disputas de espacios y poder entre las diferentes organizaciones, marcaron sust heterogéneas posiciones frente a la inusitada violencia que había sacudido a la capital provincial.

Sin embargo, a la hora de dar su versión de los sucesos, las centrales obreras lo hicieron en nombre del conjunto de gremios que las integraban. La Federación Anarquista, frente a rumores circulantes, descartó la posibilidad de que los actos violentos hayan sido cometidos para favorecer a algún sector político tradicional, declarando que “ninguna concomitancia con los partidos políticos ni ningún propósito de robo ni de asalto inspiró nuestro movimiento.” (LG, 05.02.1932). En su manifiesto describieron la explosión de la multitud como el resultado de una catarsis colectiva. La FORA explicó que durante la huelga se exhibió:

[...] comercio contra comercio, comercio contra gobierno, odios partidarios y todo lo que de retrógrado tiene el hombre, todo lo que durante la estadía del gobierno provisional ha sido contenido en las luchas políticas y económicas, todo el malestar que sufre la población entera a raíz de la crisis imperante, todo, absolutamente todo, ha hecho su explosión ese día ¿Quién podría contenerlo? [...] mejor sería reconocer sinceramente que esa explosión de odios populares, estaba en todos [...] y tiempo es ya que no se siga sembrando tanto odio, tanta miseria y tanto malestar. (LG, 05.02.1932).

Y lo mismo hizo en su manifiesto el Comité Mixto de Gremios Autónomos, para el cual lo sucedido fue “la consecuencia del malestar general”.

De esta manera, ambas organizaciones obreras ofrecían una justificación social a una huelga que había sido convocada con objetivos esencialmente políticos. Y coherentemente con esto, no dejaban de advertir que el movimiento era “predecesor de otras luchas gremiales”.

Cuando la versión policial identificó a un militante de la FORA, Miguel Sánchez, como el principal acusado de dirigir los saqueos, y difundió una lista de detenidos repleta de foristas, esta entidad debió salir a explicar con más énfasis su versión de los hechos, contestando las acusaciones y defendiendo

vehementemente a sus afiliados. En su amparo señalaba que:

No cabe suponer de ninguna manera que los huelguistas apedreen los frentes de aquellas casas de comercio que desde que fue conocida la declaratoria de huelga cerraron sus puertas, como tampoco cabe suponer que los huelguistas se dediquen a arrebatar carteras de la mano de mujeres de nuestra condición social, ni que los huelguistas tengan un conocimiento a fondo de ciertos secretos de las casas de tolerancia, como tampoco se explican infinidad de actos de los cuales se tienen conocimientos y que iban en contra la misma huelga. (LG, 05.02.1932).

Los militantes foristas, especialmente los más jóvenes, eran conocidos por provocar en casi todos los conflictos destrozos en la vía pública, como romper las lámparas del alumbrado y desparramar la basura en las calles. No obstante, en este caso la FORA no cejaba en sus esfuerzos por dejar al margen de la protesta a todos aquellos episodios que transgredían los cánones del comportamiento público esperables de los trabajadores en huelga – aun para los anarquistas. En ese sentido, y en la medida en que la explosión de la multitud implicó vejámenes – que incluyeron la violación y golpiza de mujeres – la FORA debió deslindar responsabilidades y subrayó la participación de diversos grupos sociales en los hechos. Admitir que a sus afiliados les cabían responsabilidades por esos hechos de violencia – como lo destacó Daniel James (1995) para otros episodios de protesta obrera – habría empañado la legitimidad, la autenticidad y el verdadero significado del movimiento huelguístico.

El manifiesto expresaba en ese sentido que:

Más de un comentario hemos oído a personas que por su condición social no las hubiéramos creído mezcladas en estos conflictos [...] esa explosión de odios populares estaba en todos, aún en el mismo comercio, en gran parte de la misma policía, en la prensa, en los asiduos concurrentes a las casas de tolerancia y en más de cuatro fanatizados con el partidismo político [...] después de pasados los hechos, cada uno se demuestra asustado de su propia obra. (LG, 05.02.1932).

La “turba”, para los dirigentes de la FORA, habían sido “todos”. Incluso la policía que “acompañó a la turba” o la “miró con pasividad”.

Esta última – argumentaban las voces de los damnificados entrevistados por los diarios – “no disimulaba su actitud cómplice”. *La Gaceta* afirmaba que la “apatía” policial podía tener relación con el atraso de los sueldos de los agentes, quienes habían decidido manifestar su descontento haciendo caso omiso a las órdenes de resguardar el orden en el curso de la huelga. Estas versiones, sin embargo, fueron prontamente negadas por las autoridades policiales a cargo.

En síntesis, la explosión de la multitud había desdibujado los roles tradicionales desempeñados por algunos actores e instituciones, lo que facilitaba la estrategia discursiva de la FORA y también del Comité Mixto, que apuntaban a difuminar las responsabilidades de los desmanes, los que eran presentados a su vez como el resultado de las profundas tensiones sociales de la sociedad tucumana. Al colectivizar la protesta, se convertía en una explosión “anónima” y las responsabilidades últimas se desdibujaban o se trasladaban al poder.

La huelga habría abierto el cauce para que se manifestara una especie de catarsis colectiva en un marco de profundo deterioro de las condiciones materiales de existencia de los sectores más pobres de la población. La indignación contenida habría explotado en el marco de la protesta política de los trabajadores en huelga. Los hechos, las interpretaciones, las justificaciones y los actores que intentamos recuperar a través de la multiplicidad de voces en tensión, dan cuenta de la complejidad de los sucesos. Atribuirlos a una sola causa, pensarlos sólo en términos de lucha de clases, subsumirlos en la problemática del delito común, vincularlos a maniobras y manipulaciones de políticos tradicionales o intentar escindir la huelga de los hechos de violencia desdibujaría su riqueza ¿Cómo debemos interpretar los sucesos de febrero de 1932? ¿Por qué una huelga general de neto tinte político, convocada para protestar contra las deportaciones que había ordenado la dictadura de Uriburu en retirada tuvo en Tucumán los desbordes de violencia y los incidentes descriptos?

Las acciones colectivas de los trabajadores no pueden entenderse al margen de los procesos políticos en los que están insertas (Tarrow, 2004 y Tilly, 1997) porque es muchas veces allí donde las explicaciones adquieren sentido. De esta forma, un momento bisagra entre un gobierno que ya había o y otro que estaba por asumir representa un intersticio donde la represión se

distrae, los costos de la protesta se reducen y permiten a organizaciones obreras presentarse desafiantes en los escenarios políticos y sociales. El cambio de gobierno, al implicar, además, la restauración de las instituciones democráticas en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), podría haberse percibido como la inauguración de un nuevo contexto en el que los márgenes para la acción reivindicativa de los trabajadores se ensanchaban.

Pero si este proceso implicaba todo el vasto territorio nacional ¿qué fue distinto en Tucumán? En un marco de malestar económico y aguda represión social, la especial coyuntura política tucumana se caracterizó por un intenso debate donde el bienestar de los trabajadores se había convertido de manera inesperada en la “joya de la corona” en las negociaciones políticas del Colegio Electoral. Las promesas de Nougues y Piossek para ganar los votos socialistas significaban instaurar un debate público sobre las condiciones de vida de la clase obrera y hasta la aceptación por parte de las dos variantes locales del conservadurismo de que las aspiraciones de mejoras en este terreno eran legítimas. En tal sentido, las expectativas respecto a la nueva etapa que se iniciaba habrían generado un clima de optimismo entre los trabajadores. Como decían los socialistas, era posible en lo inmediato que “un gobierno amparado en la ley y controlado por los demás poderes pueda acrecentar las actividades vitales y el trabajo en beneficio de la clase obrera.” (LG, 06.02.1932).

Ese optimismo, no obstante, era matizado por los comunistas para quienes “ningún gobierno burgués, por más obrerista y demagogo que se pinte, podrá satisfacer sus más elementales necesidades” (JC, 02.1932). Sin embargo, aun para aquellos cuyas expectativas no eran tan optimistas y estaban convencidos de que sólo “en su esfuerzo y en su lucha reside la fuerza” de los trabajadores, las expectativas sí alentaban a reimpulsar la lucha en los sindicatos. En ese sentido los *chauffeurs*, cuya dirigencia estaba ligada al comunismo, expresaban que:

[...] después de 18 meses que hemos estado un tanto alejados de nuestras actividades sindicales por imposición de un gobierno bárbaro y despótico, nuevamente nos colocamos en nuestra posición de obreros conscientes de nuestro deber, para enfrentar como en otros tiempos la lucha sindical en defensa de nuestros intereses morales y

materiales que tan indignamente pretendieron, y aún nos arrebataron.
(EO, 26.02.1932)

También lo entendían así los obreros de la madera, cuyos dirigentes manifestaron no estar más “dispuestos a continuar en ese tren de miseria en que nos metió la reacción conservadora”, y expresaban que se abocarían a la reconquista “de todas nuestras mejoras obtenidas hasta el 6 de septiembre de 1930.” (EO, 15.03.1932).

El clima de transición en la provincia se caracterizó entonces por sentimientos encontrados. Expectativas procedentes del recuerdo de los años previos que los ferroviarios describieron como una etapa “de tanto dolor, de tanta miseria sufrida, de tanta baja perpetrada al amparo de un movimiento revolucionario patriótico pero que fue utilizado con fines reprobables por elementos espurios, malignos y crueles.” (EO, 27.02.1932).¹⁵ Pero también de ciertos resquemores y desconfianzas respecto a las acciones del futuro gobierno. En esa coyuntura compleja de esperanzas y suspicacias, la explosión de la multitud, la visibilidad de los débiles, fue una advertencia. El manifiesto de la FORA así lo decía “La situación de los obreros y estudiantes presos desde el 6 de septiembre de 1930 nos llevó a un movimiento justiciero y solidario, y ese mismo espíritu habrá de seguir latente en todos los trabajadores.” (LG, 05.02.1932).

En definitiva, en los primeros días de febrero de 1932 los pobres se habían hecho más visibles en San Miguel de Tucumán, sus condiciones materiales se habían utilizado como herramientas proselitistas y, por sobretodo – copando el centro de la ciudad y atacando símbolos de las diferencias sociales – habían demostrado su potencial como actores políticos relevantes. El movimiento violento y espasmódico de los trabajadores irrumpió en un escenario donde voces ajenas hablaban su nombre.

¿Qué obtuvo la multitud? La huelga fue un episodio de la vida política que destacó los márgenes, pero no generó mejores condiciones de vida para los trabajadores. Tampoco la advertencia sobre la potencia que podría

¹⁵ Quizás no sea vano recordar – para que no sorprendan las alusiones de dirigentes obreros a los principios “revolucionarios” y “patrióticos”, posteriormente desvirtuados, que habrían animado el golpe de Estado de setiembre de 1930 – que gran parte del espectro político opositor de los derrocados en setiembre de ese año, incluyendo sectores del socialismo, habían justificado el alzamiento armado contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen.

alcanzar, debidamente canalizado, el descontento de los pobres tuvo un efecto inmediato. Tres meses después, electo Juan Luis Nougués gobernador de la provincia, a través de un manifiesto el Comité Mixto de Gremios Autónomos, expresaba que:

[...] con la máscara de una bandera de pureza inventada para barnizar un plan de delitos, el malón sigue a punta de lanza. Con igual desfachatez aquí se burlan los más elementales derechos que son patrimonio reconocido de la clase trabajadora. Lo mismo que ayer, se clausuran locales, se entorpece las reuniones con chicanas policiales, se detiene a compañeros por el delito de repartir volantes obreristas, en tanto el espectro de la miseria extiende su imperio de lágrimas, de desolación y muerte. Camaradas: hay una verdad terrible; y es ésta: nuestro pueblo se muere de hambre y su libertad camina de rodillas. (LG, 01.05.1932).

En tal sentido, si consideramos los factores emocionales de la experiencia podrán entenderse las razones por las que cuando los sindicatos, a través del CMGA, afirmaban que “en el ambiente local, el infierno se agranda de hipocresía traidora” (LG, 01.05.1932), hablaban, sin duda, de la defraudación de las expectativas depositadas en un nuevo gobierno.

Sin embargo, y a pesar de la falta de conquistas tangibles, hacia el interior del mundo del trabajo y, particularmente, del sector sindical del movimiento, la huelga fue un hito que impulsó a las organizaciones obreras para comenzar a desandar el “repliegue en la defensiva”.

Bibliografía

- CAMARERO, Hernán. *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas en el mundo del trabajo en la Argentina, 1925-1935*. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 2007.
- FIGUEROA ROMÁN, Miguel “Problemas sociales de Tucumán”. *Revista Sustancia*, Tucumán, N° 13, enero-febrero de 1943.
- ISCARO, Rubén. *Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino*. Buenos Aires: T.II, Ateneo, 1973.
- JAMES, Daniel. “17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina”. En TORRE, Juan Carlos. *El 17 de octubre de 1945*. Buenos Aires: Ed. Ariel, 1995.

- _____. *Doña María*. Buenos Aires: Ed. Manantial, 2004.
- KORZENIEWICZ, Roberto. "Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943". *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, Vol. 33 Nº 131, 1993.
- MATSUSHITA, Hiroshi. *Movimiento obrero argentino, 1930-1943*. Buenos Aires: Ed. Hyspamérica, 1986.
- MCGEE DEUTSCH, Sandra. *Las Derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile. 1900-1939*. Quilmes: Ed. UNQ, 2005.
- PARRA, Graciana, "¿'Restauración Conservadora'? El Partido Demócrata Nacional en la oposición, Tucumán (1930-1938)". *Actas de las XI° Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia*, Tucumán, 19 al 22 de Septiembre de 2007.
- TARROW, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza, 2004.
- TILLY, Charles. "Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758- 1834". En *Theory and Society*, Vol. 26, Nº 2-3, Abril de 1997, p. 245-273.

Fuentes

Diario *La Gaceta de Tucumán*.

Diario *El Orden de Tucumán*.

Diario *La Vanguardia*.

Boletín Interno Editado por el Agit-Prop del Partido Comunista, Febrero de 1932.

Juventud Comunista, Órgano Central de la Federación Juvenil Comunista, Año XI, Nº80, Buenos Aires, Febrero de 1932.

Comité Ejecutivo del Partido Comunista, "Exijamos la vuelta inmediata de los obreros y estudiantes deportados en 'El Chaco'", Archivo General de la Nación, Legajo del PC Nº3362.

Recebido em ou./ nov. de 2008 e
aprovada em jan. de 2009.